

# ESTADOS UNIDOS Y LAS REVOLUCIONES EN EL CARIBE. EL MITO DE LOS INTERESES VITALES\*

JEROME SLATER

¿POR QUÉ es que de manera invariable interviene Estados Unidos en mayor o menor medida en las revoluciones sociales en América Latina, especialmente en el Caribe, y por qué este país apoya siempre a las fuerzas de derecha? La causa original de esta política de Estados Unidos ha sido el artículo de fe axiomático de profundas raíces en la doctrina Monroe, que señala que Estados Unidos tiene intereses vitales en juego en América Latina, particularmente en el Caribe, y que esos intereses requieren el mantenimiento de la estabilidad política y el apoyo a los gobiernos conservadores anticomunistas y “pro norteamericanos”, en contra de la izquierda revolucionaria.

La Doctrina Monroe, por supuesto, estuvo basada originalmente no sólo en concepciones estratégicas, sino también en concepciones ideológicas: la creencia de que Estados Unidos tiene una misión u obligación moral de ejercer su poder en el hemisferio occidental para impedir la llegada al poder de movimientos, ideologías, instituciones hostiles, o simplemente no favorables al interés norteamericano. En el siglo XIX el colonialismo europeo fue considerado como la principal amenaza. En la década de los años treinta lo fue el fascismo, y desde la Segunda Guerra Mundial dicha amenaza es el comunismo.

Al incorporar de manera tan clara tanto la estrategia como la ideología, la Doctrina Monroe creó el poderoso mito que aún hasta nuestros días subyace a la política de Estados Unidos hacia América Latina: el mito de que Estados Unidos tiene tanto el imperativo del interés nacional, como el derecho moral de tratar a América Latina como lo hace *de facto*, esto es, como su esfera de influencia exclusiva. Este mito está lejos de tener carácter cínico, ya que no se trata de un instrumento hipócrita utilizado por los formuladores de la política para ocultar objetivos no confesados, tales como la explotación económica o el expansionismo norteamericano en cualquiera de sus dimensiones. Por el contrario, es precisamente su condición como artículo de fe lo que hace tan pernicioso el mito de la doctrina Monroe, en razón de que ha cegado a los norteamericanos, tanto a los formuladores de la política como al individuo común y corriente, en lo tocante a la naturaleza de los verdaderos intereses de Estados Unidos por una parte, y a las consecuencias del comportamiento

\* Traducción de Humberto Garza.

de este país en el hemisferio. Bajo el gobierno de Reagan, la continuación del mito de la doctrina Monroe en relación con los intereses nacionales vitales, está conduciendo hacia una catástrofe moral y política. El apoyo al *statu quo* generalmente conservador y autoritario en América Latina ha sido el propósito tácito, y además un claro efecto de la diplomacia, la política económica y la política militar de la mayoría de los gobiernos norteamericanos desde 1945.

La política norteamericana ha sido, por excelencia, la de establecer relaciones estrechas y cordiales con los gobiernos dictatoriales de derecha en América Latina, debido a que esos gobiernos, por razones de carácter táctico, y de carácter ideológico, han sido los partidarios más entusiastas de las políticas anticomunistas de los Estados Unidos en el hemisferio y a lo largo y ancho del mundo. En el terreno económico los propósitos del comercio, de la inversión y de los programas de asistencia de Estados Unidos, han sido los de promover los intereses económicos norteamericanos, y los de financiar a aquellos gobiernos autoritarios que no sólo han sido anticomunistas en sus políticas internas y externas, sino que han sido bastante más receptivos a los intereses privados norteamericanos en comparación con algunos gobiernos populistas.

De manera similar, los programas de asistencia militar han sido diseñados primordialmente para fortalecer el *statu quo*. Las fuerzas armadas latinoamericanas, aunque ocasionalmente se han alineado con las fuerzas reformistas, normalmente han actuado como el principal apoyo de las élites gobernantes conservadoras contra el cambio económico, social y político. Además, los militares han sido la más poderosa institución política en América Latina, actuando algunas veces como un grupo de veto contra un cambio indeseable; otras veces gobernando de manera indirecta bajo el burdo disfraz de un frente civil, y con mucha frecuencia, especialmente en los años recientes, tomando el poder abiertamente y gobernando de manera directa. En este contexto, los programas de asistencia militar de Estados Unidos fueron diseñados para mantener "el orden interno" y, al controlar el mercado de armas, excluir del hemisferio a los proveedores del bloque soviético. Con estos objetivos, grandes cantidades de armas norteamericanas han sido proporcionadas o vendidas a las fuerzas armadas latinoamericanas. Miles de oficiales militares de la región han sido llevados a Estados Unidos para su formación y adiestramiento militar, especialmente en los métodos de la "contrainsurgencia"; asimismo, se han llevado a cabo ejercicios conjuntos de entrenamiento, y varios miles de oficiales norteamericanos han servido como asesores a las fuerzas armadas latinoamericanas.

Cuando todos los medios han fracasado, Estados Unidos ha recurrido a operaciones encubiertas de la CIA, y aun a enfrentamientos militares directos para impedir la llegada al poder de gobiernos radicales, incluso potencialmente radicales. En 1954, el gobierno de Eisenhower utilizó la CIA para organizar, financiar, armar y dirigir una invasión de exiliados derechistas que logró derrocar al gobierno nacionalista e izquierdista de Guatemala. En 1959-1960, el mismo gobierno planeó derrocar a Castro en Cuba.

El gobierno de Kennedy puso en práctica un plan en Bahía de Cochinos, con el bien conocido y desastroso resultado; al fracasar dicho plan, ese gobierno

buscó la manera de asesinar a Castro. En 1962, Kennedy utilizó a la CIA para desarticular el partido marxista que buscaba la victoria en unas elecciones libres en Guyana; en este caso se puso en práctica una amplia gama de actividades de la CIA incluyendo el financiamiento de partidos políticos, el financiamiento de publicaciones periódicas, el apoyo a elementos conservadores en los sindicatos, el espionaje de los grupos izquierdistas, y la instigación a la violencia de grupos derechistas contra grupos marxistas.

A principios de los sesenta Estados Unidos intervino en Brasil, apoyando a las fuerzas conservadoras contra el gobierno de Goulart, nacionalista y moderadamente izquierdista; en 1964, Goulart fue derrocado por un golpe militar derechista, apoyado de manera entusiasta por el gobierno de Johnson. En 1965, cuarenta mil soldados norteamericanos invadieron la República Dominicana para impedir la victoria de un movimiento popular que el gobierno de Johnson temía que pudiera transformarse en comunista o castrista.

En Chile, en 1970-1973, el gobierno de Nixon llevó a cabo un esfuerzo masivo, utilizando la CIA, para "desestabilizar" el gobierno "marxista" del presidente Salvador Allende y para instigar el golpe militar que lo derrocaría en 1973. Además de la colaboración con los militares, los instrumentos para la intervención norteamericana incluyeron: el boicot contra la economía chilena; el apoyo financiero a las fuerzas contrarias al gobierno de Allende, desde la izquierda moderada hasta la extrema derecha; la organización y el financiamiento de marchas de protesta masivas, huelgas y motines; el aprovisionamiento de armas a los militares golpistas y la complicidad en el asesinato del comandante en jefe de las fuerzas armadas chilenas, quien se oponía a un golpe contra el gobierno democráticamente elegido. Hoy en día, el gobierno de Reagan está proporcionando considerable apoyo económico y militar a las fuerzas represivas de "contra-insurgencia" en El Salvador; está apoyando decididamente diversas operaciones de la CIA y otras actividades encubiertas aunque ampliamente reportadas, diseñadas para "desestabilizar" el gobierno sandinista de Nicaragua, y ha emprendido operaciones encubiertas en apoyo de las dictaduras militares de Honduras y Guatemala, las cuales enfrentan también levantamientos internos.

Éstas son sólo las intervenciones norteamericanas más dramáticas y visibles contra fuerzas de izquierda en América Latina desde 1945. En particular, a partir de los primeros años de la década de los sesenta se puede considerar como inevitable el que los esfuerzos para reprimir cualquier insurgencia izquierdista que amenazara a un gobierno de derecha en América Latina incluyera, por lo menos, el apoyo político y económico de Estados Unidos, usualmente el aprovisionamiento de armas, de asesoría y de asesores para la contra-insurgencia y, a menudo, operaciones encubiertas conducidas por la CIA. En suma, las políticas del gobierno de Reagan para Centroamérica son en lo fundamental consistentes con la política y el comportamiento norteamericano dominante a partir de 1945.

Sólo los gobiernos de Kennedy y Carter han sido excepciones parciales a esta tendencia, ya que ambas iniciaron sus respectivos períodos cambiando

hacia una política de apoyo a la izquierda democrática, aunque ambas terminaron regresando a las políticas tradicionales. El presidente Kennedy asumió el cargo en medio de un clima anti-norteamericano generalizado en América del Sur en 1958, al cual se añade la victoria de Fidel Castro en Cuba en 1959. Las manifestaciones de protesta dirigidas, en una primera instancia, contra la gira del vicepresidente Richard Nixon, y orientadas de manera más general contra la política de Estado Unidos en su conjunto, agudizan la percepción, por lo demás acertada, de Estados Unidos como un serio obstáculo para el progreso económico, político y social; esto exacerba el antinorteamericanismo en América Latina. El éxito de la revolución cubana encabezada por Castro contra el gobierno de Batista, apoyado por Estados Unidos, fue aún más importante porque simbolizó la creciente insatisfacción de las masas frente al *status quo* establecido en los países de América Latina, e hizo dolorosamente obvio el hecho de que las dictaduras de derecha, con sus políticas reaccionarias en el terreno social y económico, y con la represión indiscriminada de toda oposición política, estaban creando una atmósfera conducente al radicalismo y a la revolución. El nuevo gobierno de Kennedy estaba convencido de que la obstinada resistencia al cambio por parte de las élites gobernantes conservadoras en América Latina era absurda y contraproducente, y que la continuación del apoyo de Estados Unidos a esas élites habría de enajenar a las nuevas generaciones de líderes en América Latina. Por consiguiente, a fin de contener la expansión del así llamado "Castro-comunismo", y de alinear a los nuevos grupos de poder que estaban entonces surgiendo con Estados Unidos, Kennedy decidió presionar activamente en favor de la democracia y de la modernización en América Latina.

Sin embargo, el distanciamiento de los gobiernos de Kennedy y Carter de la política norteamericana tradicional fue sólo parcial, ya que ambos presidentes continuaron aceptando la premisa de que Estados Unidos tenía intereses vitales en juego en América Latina, y de que esos intereses serían mejor servidos con el mantenimiento de la estabilidad política y del predominio de Estados Unidos en América Latina, especialmente en el Caribe. La mayor diferencia entre la posición defendida por Kennedy y Carter, por una parte, y la posición de otros gobiernos norteamericanos, por la otra radicaba en su evaluación de las causas del descontento en América Latina, y por ende, de la naturaleza de la amenaza a la estabilidad política y al predominio de Estados Unidos en el área. Para la mayoría de los gobiernos norteamericanos en el período de la postguerra, la inestabilidad política en América Latina era considerada, principalmente, como el resultado de la "subversión" comunista desde el exterior, la cual se debía y se podía suprimir con medios esencialmente militares; tanto para Kennedy como para Carter, sin embargo, la intranquilidad en América Latina era resultado de las condiciones internas de cada país, y en el largo plazo podría remediarse sólo mediante un cambio constructivo en lo económico, lo político y lo social. Dadas estas diferencias en la evaluación de las causas de la inestabilidad, se seguía naturalmente que la política básica de los gobiernos de Truman, Eisenhower, Johnson, Nixon, Ford y Reagan,

era la de fortalecer el *statu quo* en América Latina con diversos instrumentos diplomáticos, económicos y militares, mientras que la política básica de los gobiernos de Kennedy y de Carter era la de buscar el cambio controlado del *statu quo*.

Las políticas de Kennedy y de Carter, entonces, seguían considerando la estabilidad política en América Latina como su principal objetivo, aunque estas políticas se basaban en el supuesto de que la preservación del *statu quo* era un propósito quimérico, y de que por lo tanto el mejor curso de acción para Estados Unidos sería el de ayudar a orientar las fuerzas revolucionarias en América Latina hacia canales razonablemente moderados, esto es, hacia canales no comunistas. Así, por breves espacios durante el período de posguerra, Estados Unidos no sólo dejó de buscar impedir el cambio, sino que fue más allá, hasta llegar a convertirse en una poderosa fuerza promotora del cambio.

No obstante, sería erróneo suponer que las políticas de Kennedy y de Carter fueron solamente producto de su evaluación de lo que constituía una estrategia anticomunista efectiva. Parece bastante claro que ambos gobiernos no sólo consideraban que el fortalecimiento del *statu quo* era una estrategia ineficaz, sino que era también moralmente inaceptable. En particular, Kennedy buscó minimizar el papel que las consideraciones morales desempeñaban en sus políticas, aunque existe poca duda en cuanto a que muchos de sus más cercanos consejeros sobre América Latina estaban genuinamente afectados y ofendidos por el papel reaccionario que Estados Unidos había venido desempeñando en la región y por el efusivo apoyo que brindaron a Trujillo en la República Dominicana, a Somoza en Nicaragua, a Pérez Jiménez en Venezuela, a Stroessner en Paraguay, etc. Asimismo, no existe ninguna duda en cuanto que Carter y sus asesores sobre América Latina creían profundamente que, aparte de cualquier consideración relativa a la manera de maximizar el interés nacional de Estados Unidos, este país debería ayudar a la causa de la democracia y de los derechos humanos en América Latina porque eso era lo correcto.

¿Por qué buscó Kennedy minimizar las consideraciones morales en la presentación de sus políticas? Sin duda, parte de la respuesta es que su gobierno, como la generalidad de los norteamericanos, pensaba que en el terreno de la política exterior era de alguna forma ingenuo y equivocado tomar en cuenta consideraciones morales; a sucesivas generaciones de norteamericanos se les había enseñado que la búsqueda consistente del propio interés en política exterior era una muestra de madurez, determinación y realismo. Además, independientemente de lo que el gobierno de Kennedy pudiese haber pensado, tenía que conseguir apoyo a sus políticas de parte de un Congreso que repetidamente manifestó la idea de que el gasto público podía justificarse mejor si se vinculaba con temas de "seguridad nacional" y, en particular, con el anti-comunismo. Finalmente, en la medida en que se pensara que realmente estaban en juego intereses vitales en América Latina, perdían influencia las consideraciones morales. Por estas razones, el gobierno de Kennedy disfrazó cuidadosamente su idealismo genuino y su compromiso con la democracia y los derechos humanos como un mero interés nacional egoísta.

La principal iniciativa a largo plazo de la política latinoamericana de Kennedy fue la Alianza para el Progreso, un programa de asistencia económica a diez años bajo el cual Estados Unidos otorgó veinte mil millones de dólares en apoyo a programas de desarrollo y de redistribución económica, acompañados por amplias reformas de carácter político y social. La Alianza fue presentada como un programa anticomunista efectivo en tanto que su propósito era eliminar las condiciones subyacentes que originan la revolución y el comunismo: bajos ingresos, esquemas feudales de propiedad de la tierra, falta de viviendas, insuficiente asistencia social, baja escolaridad, estructura impositiva desigual, etc. La Alianza estaba basada totalmente en el supuesto de que el *statu quo* en América Latina estaba condenado a desaparecer, por lo que la única opción real era entre una reforma moderada y democrática, o una revolución radical y violenta. En palabras de presentación de la Alianza del propio presidente Kennedy: "Aquellos que hacen imposible la revolución pacífica, hacen inevitable la revolución violenta." Así, el anticomunismo continuaba siendo el hilo conductor de la política de Estados Unidos, pero éste debía ser un anticomunismo ilustrado, asociado a las fuerzas de izquierda democráticas y moderadas, en lugar del anticomunismo tradicional, aliado a las fuerzas de derecha oligárquicas, autoritarias y represivas.

El otro gran componente de la política de Kennedy fue el esfuerzo por crear en América Latina las condiciones políticas que habrían de facilitar el funcionamiento de la Alianza. Este esfuerzo requería resistencia a los golpes militares contra los gobiernos constitucionales, así como apoyo a los gobiernos democráticos y de orientación social moderada, por encima de las dictaduras tradicionales. Con este propósito el gobierno de Kennedy recurrió a la diplomacia, a los programas de asistencia económica, y aun a la influencia militar para presionar a los gobiernos derechistas, o para respaldar a aquellos gobiernos libremente elegidos, particularmente en Perú, Haití, Honduras, Venezuela y la República Dominicana.

Sin embargo, en un último análisis el presidente Kennedy no llegó realmente a cuestionar o a desafiar la premisa subyacente a la política tradicional de Estados Unidos, la cual sostiene que la revolución y el comunismo en América Latina, especialmente en el Caribe, amenazan intereses vitales de Estados Unidos y, por esta razón, el mismo gobierno que desarrolló la Alianza para el Progreso y que respaldó de manera decisiva el avance de algunos movimientos democráticos, también aprobó la invasión de Bahía de Cochinos, continuó ejerciendo fuertes presiones (incluyendo intentos de asesinato) contra Fidel Castro después del fracaso de la referida invasión, utilizó la CIA para impedir la victoria electoral de los marxistas en Guyana, puso en práctica una serie de operaciones paramilitares encubiertas con el propósito de combatir levantamientos en América Latina apoyados por Cuba, y más importante aún (y más desastroso para la causa del cambio político democrático), apoyó el fortalecimiento y la politización de las fuerzas armadas en América Latina. Al ampliar los programas de asistencia militar y al reorientarlos hacia la "contrainsurgencia" en lugar de la "defensa hemisférica", el gobierno de Kennedy fortaleció tanto

la capacidad de las fuerzas armadas en América Latina como su inclinación a combatir no sólo a elementos "comunistas" o "subversivos", sino también cualquier movimiento político que buscara el cambio, aun aquellos movimientos orientados precisamente al cambio democrático y moderado para el cual estaba diseñada en principio la Alianza para el Progreso.

De este modo, aunque fue ciertamente el gobierno de Johnson el que dió el tiro de gracia a la Alianza para el Progreso y al conjunto de medidas diplomáticas, económicas y políticas asociadas con ésta, es probable que, aun y cuando Kennedy hubiera vivido para tener un segundo período presidencial, las inconsistencias internas de su política (originadas en su aceptación de las premisas de la política tradicional de Estados Unidos) habrían desarticulado sus esfuerzos para promover el cambio político democrático. En cualquier caso, a partir de Kennedy todos los presidentes norteamericanos, con la parcial e inconsistente excepción de Carter, han proseguido las políticas tradicionales de apoyo al *statu quo* conservador.

De manera similar al gobierno de Kennedy, el de Carter inició sus gestiones con una política latinoamericana que estaba basada en un auténtico sentido de obligación moral de usar el poder y la influencia de Estados Unidos en América Latina para promover el cambio pacífico, apoyar la democracia y proteger los derechos humanos, así como la idea de que en el largo plazo el interés nacional de Estados Unidos estaría mejor servido en una América Latina democrática y progresista. Entre las medidas adoptadas para alcanzar estos objetivos, destacan las siguientes: el restablecimiento de la ayuda económica al gobierno socialista de Jamaica (suspendida tiempo atrás por el gobierno de Ford); el ejercer fuertes presiones sobre los militares en la República Dominicana para evitar que llevaran a cabo la amenaza de un golpe después de la elección del gobierno democrático y reformista de Guzmán, en 1978; el ejercer presiones similares para restaurar y preservar el proceso democrático en Perú, Bolivia, Brasil y Ecuador; el enfriar las relaciones y terminar la asistencia militar a las dictaduras militares de Argentina, Uruguay y Chile, y el realizar una amplia campaña en apoyo a los derechos humanos en toda América Latina.

No obstante, al enfrentar la perspectiva de un cambio revolucionario, la respuesta del gobierno de Carter fue incierta e inconsistente, aun cuando las revoluciones buscaran derrocar a gobiernos dictatoriales que hubieran eliminado toda posibilidad de un cambio pacífico. En Nicaragua, Carter empezó por cancelar la ayuda económica y militar al gobierno de Somoza, y a la vez ejerció una fuerte presión sobre el dictador para que renunciara en favor de un gobierno moderado de coalición. Cuando Somoza se rehusó a lo anterior y continuó la represión brutal de cualquier oposición, polarizando de esta forma a la sociedad nicaragüense a tal grado que la única opción real eran los sandinistas, el gobierno de Carter modificó su posición: "Durante los últimos ocho meses de la insurrección nicaragüense el objetivo indiscutible de la política de Estados Unidos fue impedir una victoria sandinista."<sup>1</sup> Entonces, cuando es-

<sup>1</sup> William Leo Grande, "A Splendid Little War", *International Security*, 1981, p. 29.

ta política fracasó y los sandinistas triunfaron, el gobierno de Carter decidió reparar el daño, buscar una buena relación con el nuevo gobierno y proporcionarle ayuda económica. No obstante, apenas se había acordado lo anterior cuando, en los últimos meses de su gobierno, de nueva cuenta Carter cambió de parecer y suspendió el programa de asistencia económica, argumentando que se había descubierto que Nicaragua estaba proporcionando armas al movimiento revolucionario en El Salvador; pero esto se debió también, sobre todo, al cambio general del gobierno de Carter hacia una posición más conservadora y anticomunista alrededor del mundo.

De manera similar, aunque en El Salvador el gobierno de Carter había empezado a presionar a las fuerzas armadas y a una junta derechista para que aceptaran la necesidad de llevar a cabo una reforma agraria, realizar elecciones libres y respetar los derechos humanos, Estados Unidos terminaría por reanudar el envío de armas a este régimen, aun en ausencia de cambios verdaderos, antes que enfrentar la posibilidad de que lo derrocaria un movimiento guerrillero revolucionario. Ante el inminente dilema, Carter (como Kennedy tiempo atrás) arrojó el peso de Estados Unidos del lado del *statu quo*, sin importar qué tan inaceptable resultara, antes que abandonar las premisas tradicionales de la política norteamericana acerca de los supuestos intereses vitales de ese país en evitar desafíos revolucionarios a su predominio en el Caribe.

En contraste con Carter, el gobierno de Reagan se ha distinguido por su consistencia, en tanto que ha regresado de manera incuestionable a la política tradicional de afirmar la hegemonía de Estados Unidos en el Caribe, y de brindar un agresivo apoyo a las fuerzas conservadoras de toda América Latina, independientemente de consideraciones sobre la democracia, los derechos humanos o la justicia económica y social. De acuerdo con la forma en que el gobierno de Reagan entiende el fenómeno (en realidad o como pretexto), la intranquilidad revolucionaria en América Latina es resultado principalmente de la agresión comunista desde el exterior, mediante la cual la Unión Soviética, actuando directamente o a través de Cuba y de Nicaragua, está amenazando intereses vitales de Estados Unidos, a la vez que está buscando socavar la Doctrina Monroe. Para hacerle frente a la percepción de esta amenaza, el gobierno de Reagan ha recurrido a sus aliados naturales en América Latina, esto es, los regímenes militares y autoritarios, cortejando activamente a las más prominentes dictaduras militares en el hemisferio, notablemente a Brasil (hasta fines de 1984), Chile y Argentina (hasta la guerra de las Malvinas), con ofrecimientos para mejorar las relaciones diplomáticas, incrementar el envío de armas y desactivar los esfuerzos iniciados por Carter para utilizar la influencia norteamericana en defensa de los derechos humanos.

La naturaleza de la política y de las preocupaciones del gobierno de Reagan se revela más claramente en lo concerniente a Centroamérica. En El Salvador, Reagan ha incrementado la ayuda económica y militar al de Duarte, a pesar de la incapacidad o de la renuencia de este gobierno para controlar la campaña de asesinatos y torturas por parte de las fuerzas armadas y grupos terroristas de extrema derecha. Además, representantes del gobierno de Reagan

han persuadido a Duarte para que no insista en seguir adelante con la reforma agraria, así como para que deje de buscar un acuerdo negociado con el movimiento revolucionario. Como resultado de lo anterior, el gobierno de Duarte se desplazó marcadamente hacia la derecha, redujo su programa inicial de reforma agraria, aumentó la represión y emprendió, sin éxito, la búsqueda de una solución militar a sus problemas políticos.

Con la derrota electoral del régimen de Duarte en 1982 y su reemplazo por una coalición gubernamental dominada por la extrema derecha, el movimiento revolucionario (considerado como una coalición ejemplar, que incluye fuerzas socialdemócratas, así como grupos marxistas),<sup>2</sup> ha generado simpatías y apoyo entre la izquierda democrática no marxista dentro de El Salvador, en otros países del hemisferio, y entre los gobiernos y partidos social-demócratas en Europa. Con todo, el gobierno de Reagan, a pesar de algunos *lapsus* verbales ocasionales sobre las faltas y errores de las fuerzas derechistas, continuó brindando un fuerte apoyo económico y militar y aprobando las acciones encubiertas de la CIA en favor del gobierno de El Salvador, que ignora las reprimendas poco efectivas y sigue practicando una brutal represión. Aunque la posibilidad de una intervención militar directa de Estados Unidos, surgida durante los primeros meses del mandato de Reagan, al parecer se ha debilitado como resultado de una combinación de variables internas y externas, el gobierno continúa insinuando que tal acción no se ha descartado definitivamente.

En Nicaragua, desde sus inicios el gobierno de Reagan ha buscado un enfrentamiento con el gobierno sandinista, abandonando por completo la actitud inconsistente de Carter, quien procuraba mantener relaciones diplomáticas y económicas relativamente normales con miras a alentar moderación en la coalición sandinista, y evitar así la consolidación de un régimen claramente marxista, semejante al de Cuba. El gobierno de Reagan, punto menos que abiertamente, está buscando derrocar o por lo menos desestabilizar al gobierno nicaragüense con una estrategia similar a la utilizada por el presidente Eisenhower contra el gobierno de Arbenz en Guatemala, en 1954, y a la utilizada por el presidente Nixon para derrocar a Allende, en Chile, de 1970 a 1973. Los principales rasgos de tal estrategia son: una ruidosa retórica hostil a los sandinistas, el rechazo a responder a las aperturas de Managua para entablar conversaciones y acuerdo político con los Estados Unidos, el embargo económico contra Nicaragua, los esfuerzos para movilizar a otros países latinoamericanos en apoyo a las posiciones de Estados Unidos, el armar y adiestrar en territorio norteamericano a exiliados nicaragüenses antisandinistas (en desacato no sólo al derecho internacional, sino también a las leyes norteamericanas), la asistencia financiera encubierta a grupos opositores al gobierno sandinista, el respaldo de la CIA y del Pentágono a campañas de ataques militares y, posiblemente, una próxima invasión a gran escala de Nicaragua por fuerzas derechistas con bases en Honduras, encabezadas por elementos de la ex-Guardia Nacional somocista.

<sup>2</sup> Varios artículos del *New York Times* entre 1980 y 1982 expresaron esta opinión.

En una escala menor aunque creciente, el gobierno de Reagan también está respaldando a los gobiernos represivos de Guatemala y de Honduras. En Guatemala, buscó en los últimos años aliarse con el gobierno del general Romeo Lucas García para combatir el movimiento guerrillero que lo amenazaba, pero la oposición del Congreso le impidió hacer esto. En 1982, Lucas García fue derrocado por un golpe militar encabezado por el general Ríos Montt; el gobierno de Reagan reanudó entonces el envío de armas a ese gobierno basado en el argumento de una "mejora substancial de la situación de los derechos humanos", a pesar de los reportes de asesinatos, masacres y destrucción de villas indígenas perpetrados por elementos del ejército. Y en Honduras, otra junta militar represiva ha actuado como aliado de Estados Unidos para la subversión de Nicaragua, a cambio de un aumento al doble de los programas de asistencia económica y militar.

Los problemas morales inherentes a la política actual de Estados Unidos son evidentes. Ahora bien, independientemente de lo anterior, es probable que la política del gobierno de Reagan fracase en razón de sus objetivos políticos. En El Salvador y en Guatemala (quizá Honduras sea el próximo caso), las oligarquías de derecha y las "fuerzas de seguridad" que las han apoyado durante generaciones se encuentran en un virtual estado de sitio que se va cerrando, mientras que los movimientos revolucionarios en estos países aumentan cada vez más su fuerza y su influencia. En Nicaragua, un gobierno integrado por elementos de diversas tendencias está siendo empujado inexorablemente hacia la izquierda, y cualesquiera que sean sus convicciones ideológicas, están forzándolo a volver la cara hacia Cuba y la Unión Soviética en busca de apoyo para defenderse frente a las presiones de Estados Unidos y de sus aliados incondicionales. Los gobiernos con una inclinación marxista en Centroamérica (ya existentes o con proyectos de llegar a serlo en el futuro próximo) continúan requiriendo la asistencia económica de Estados Unidos o, por lo menos, la ausencia de oposición y de presiones de ese país; de este modo, si a estos gobiernos se les ofrece una opción, es probable que no se acerquen demasiado ni se vuelvan excesivamente dependientes de Cuba y de la Unión Soviética. Sin embargo, en una situación típica de "profecía cumplida", el gobierno de Reagan, con una rígida oposición ideológica, parece inclinado a destruir la opción de gobiernos independientes de izquierda moderada, e incluso gobiernos de coalición, incrementando así de manera considerable la posibilidad de que Nicaragua en la actualidad, El Salvador el día de mañana, y Guatemala y Honduras en el futuro no muy lejano, lleguen a transformarse en países revolucionarios con posiciones antinorteamericanas, y aliados de Cuba y de la Unión Soviética.

Las semillas de la catástrofe moral y política que ha sembrado en la política latinoamericana Estados Unidos en el período de postguerra, están dando frutos bajo el gobierno de Reagan. Seguramente este país podría hacer las cosas mejor (en términos morales y en términos de sus propios intereses). Una nueva política hacia América Latina debe no sólo abandonar la actitud tradicional que actualmente está llevando a su conclusión lógica el gobierno de Reagan,

sino que también debe llegar más allá de revisiones inconsistentes como las de Kennedy y Carter.

No sólo los equipos de colaboradores de estos dos ex-presidentes, también los académicos liberales críticos de la política tradicional han fracasado en el intento de reevaluar seriamente la premisa subyacente a dicha política: que Estados Unidos tiene un interés vital en oponerse al cambio revolucionario en América Latina, particularmente en el Caribe. En efecto, tanto Kennedy y Carter como los críticos liberales han cuestionado a los tradicionalistas sobre los instrumentos utilizados para impedir la expansión del radicalismo en América Latina (esto es, la represión militar), y en su lugar han argumentado en favor de la mayor efectividad de un reformismo moderado como el mejor instrumento para combatir las condiciones internas que dan lugar al surgimiento de la revolución.

Desafortunadamente, sin embargo, una vez que se ha aceptado de manera abierta o implícita que el objetivo adecuado de la política de Estados Unidos es mantener o restablecer la estabilidad política, a la vez que se impide la expansión de la revolución, en realidad no es del todo claro que el reformismo sea la manera más efectiva de conseguir dicho propósito. Debe reconocerse que, por lo menos durante los últimos 25 años, se ha señalado que los vientos del cambio están soplando sobre América Latina, por lo que Estados Unidos, en función de sus propios intereses, debe asociarse con las fuerzas emergentes.

Con todo, hasta ahora las fuerzas revolucionarias no han demostrado su efectividad; la mayoría de las sociedades latinoamericanas continúan siendo fundamentalmente tradicionales, y a los períodos revolucionarios ha seguido, típicamente, un resurgimiento de la derecha y una restauración de la "estabilidad", al menos una estabilidad inducida por el terror gubernamental. Tal vez las fuerzas de la revolución no podrán ser contenidas indefinidamente, aunque quizá se logre eso temporalmente en El Salvador y en Centroamérica en general, como de hecho se ha logrado hacerlo en el curso de varias décadas.

En suma, los liberales deben enfrentar la posibilidad de que, si la única área de debate es la relativa a los medios, los conservadores pueden estar en lo correcto: dado que los esfuerzos por un cambio moderado y democrático pueden generar una situación de expectativas crecientes, y tal vez desencadenar acciones violentas por parte de la izquierda revolucionaria, resulta más seguro y efectivo hacer abortar cualquier proceso de cambio potencialmente incontrolable por medio del autoritarismo y de la represión de la izquierda.

Como se ha señalado líneas arriba, precisamente porque Kennedy y Carter no se decidieron (o no se atrevieron) a desafiar las concepciones tradicionales sobre los objetivos de la política norteamericana hacia América Latina, incurrieron en ambivalencias y fueron inconsistentes en sus esfuerzos por cambiar los medios de esa política. En síntesis, en aquellos casos en donde estaban en marcha transformaciones radicales y era demasiado tarde para actuar sobre las condiciones que daban lugar a la intranquilidad, tanto Kennedy como Carter optaron por apoyar a los militares, Kennedy en Centroamérica y Carter en El Salvador durante los últimos meses de su gobierno.

Lo indispensable hoy día es abandonar el anacronismo de la Doctrina Monroe y de sus diversas reencarnaciones en los últimos años, y reconocer el verdadero alcance de los intereses vitales de Estados Unidos en el hemisferio, reconocimiento que habrá de limitar la necesidad de preocuparse sobre el resultado de las revoluciones en América Latina (incluso del resultado de las revoluciones marxistas en el Caribe, llamado "patio trasero" de Estados Unidos).

Ciertamente, esta visión se contrapone a la tesis convencional sobre la importancia de América Latina en general, y del Caribe en particular; y se contrapone no sólo a la posición oficial del gobierno de Estados Unidos sino también a la posición de algunos críticos, tanto liberales como conservadores, de la política norteamericana.<sup>3</sup> De acuerdo con la posición oficial, Estados Unidos tiene intereses económicos, políticos y estratégicos de vital importancia en el Caribe,<sup>4</sup> que han aumentado recientemente por el interés crucial en controlar el flujo de la migración legal e ilegal proveniente del Caribe hacia Estados Unidos.

En el área económica, Estados Unidos tiene aproximadamente 20 000 millones de dólares en inversión privada en América Latina en su conjunto, de los cuales 5 000 millones de dólares se localizan en el Caribe. Aunque esta cifra puede parecer muy alta en términos absolutos, sólo el 18% aproximadamente de la inversión extranjera directa de Estados Unidos se encuentra en América Latina, y sólo 4.5% corresponde al Caribe. Además, el monto global de la inversión extranjera de Estados Unidos apenas constituye el 5% del total de la inversión privada de este país (95% es inversión interna). En otras palabras, la inversión de Estados Unidos en América Latina en su conjunto es menos del 1% del monto total de las inversiones de ese país, y sólo 0.2% corresponde al Caribe.

Las cifras del comercio exterior revelan la poca importancia relativa del área del Caribe, con la excepción del petróleo importado de Venezuela y de México, y de algunas otras materias primas como la bauxita de Jamaica. El total del comercio exterior de Estados Unidos constituye entre el 7 y el 8% de su PNB; como parte de esa cifra, las exportaciones de Estados Unidos a América Latina en su conjunto representan el 14%, y las exportaciones al Caribe el 2% del total, aproximadamente. También las importaciones de Estados Unidos provenientes de América Latina son relativamente bajas y, además, decrecientes; pasaron de 24% del total de las importaciones en 1960, a 14%

<sup>3</sup> La opinión del gobierno estadounidense se refleja en declaraciones del ex-secretario de Estado, Alexander Haig, y del secretario auxiliar para Asuntos Interamericanos, Thomas Enders. Véase *Statement on Caribbean Basic Policy*, U.S. Department of State, 2 de agosto de 1982. Para una opinión académica, véase Jorge Domínguez, "The Caribbean: Its Implications for the United States", *Foreign Policy Association*, febrero de 1981; Margaret Daly Hayes, "Security to the South: U.S. Interests in Latin America", *International Security*, 1980; John Bartlow Martin, *U.S. Policy in the Caribbean*, Boulder Westview Press, 1978; Paul E. Sigmund, "Latin America: Change or Continuity?", *Foreign Affairs*, 60 (3), 1982; Alfred Stepan, "The United States and Latin America", *Foreign Affairs*, 58 (3), 1980.

<sup>4</sup> Martin, p. 277.

aproximadamente hoy día, volumen del que corresponde cerca de 5% a la región del Caribe.

Lo anterior no quiere decir que América Latina en su conjunto carezca de importancia económica para Estados Unidos, y únicamente significa que su importancia es reducida (salvo en lo concerniente al petróleo). Empero, el aspecto medular es que, cualquiera que sea la magnitud de los intereses económicos de Estados Unidos, éstos serán inevitablemente afectados por los esfuerzos orientados a afirmar la hegemonía de ese país en la región: los intentos abiertos por dominar tienen cada vez menos probabilidades de alcanzar éxito, pero en cambio despiertan resentimientos nacionalistas y, por ende, conllevan el riesgo de que se le cierren las puertas a los intereses económicos norteamericanos; por el contrario, con base en una racionalidad puramente económica, y en el propio beneficio de los países latinoamericanos, es posible argumentar que la participación de esos intereses económicos desempeña un papel positivo.

Siendo así, el comportamiento hegemónico no es recomendable, no sólo en razón de que los intereses de Estados Unidos en América Latina se han reducido, sino también en función de que la capacidad de este país para proteger o fomentar esos intereses con demostraciones de poderío militar, e incluso económico, ha experimentado un desgaste. América Latina en su conjunto ha dejado de ser uniformemente pobre, subdesarrollada, y dependiente de Estados Unidos en el renglón del comercio, de la inversión y de la asistencia económica. Treinta años atrás, el 50% de las exportaciones latinoamericanas se dirigían hacia Estados Unidos, en comparación con el 30% en la actualidad; de manera similar, hoy en día el 25% de las importaciones latinoamericanas provienen de Estados Unidos, en comparación con el 50% de hace una generación.

En lo que se refiere a la inversión norteamericana, su importancia para la economía de América Latina ha declinado sustancialmente, a la vez que una ola de nacionalismo económico se ha extendido sobre el hemisferio, dando lugar a la nacionalización de compañías norteamericanas y a otras medidas diseñadas para disminuir el peso económico y político de la participación de Estados Unidos en la economía de la región. Ello se aplica, en especial, a uno de los productos más importantes de América Latina: el petróleo. En 1939, México fue el primer país en nacionalizar su petróleo, y en los últimos quince años Perú, Bolivia, Ecuador y, más notable aún, Venezuela, han hecho lo mismo.

Finalmente, la asistencia económica ha dejado de ser una fuente importante de influencia norteamericana en el hemisferio. El monto total de los programas de ayuda bilateral de Estados Unidos para América Latina se ha reducido drásticamente, y hay casos de países que ya no requieren o ya no desean asistencia económica; aquellos países que continúan necesiéndola la solicitan ahora primordialmente a instituciones multilaterales, tales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, así como a otras fuentes no norteamericanas, tales como Europa Occidental y los países árabes productores de petróleo. Los límites que presenta la ayuda económica de Estados Unidos para ejercer influencia sobre los gobiernos latinoamericanos, quedaron

demostrados en el caso de Chile bajo el gobierno de Allende, y en el de Nicaragua en los últimos cinco años. Cuando el presidente Nixon canceló toda la asistencia económica norteamericana a Chile, los países europeos (tanto occidentales como socialistas) muy pronto compensaron la diferencia. Una situación similar se presentó cuando el presidente Reagan suspendió la asistencia económica a Nicaragua, ante lo cual incluso un país como Libia ofreció un préstamo de 100 000 millones de dólares.

Aun la alianza de Estados Unidos con las fuerzas armadas de América Latina ha dejado de ser un instrumento confiable para el ejercicio de poder e influencia. Aproximadamente el 90% de las armas compradas por los países latinoamericanos provienen ahora de países como Francia, Alemania Occidental, Israel, Brasil y Argentina, y no de Estados Unidos, como ocurría anteriormente. Además, las fuerzas armadas de la región han perdido interés en enviar a sus oficiales a las escuelas militares en Estados Unidos, así como en participar en ejercicios militares conjuntos con las fuerzas norteamericanas.

América Latina en su conjunto tiende al nacionalismo y busca independencia política respecto a Estados Unidos. Un buen número de países de la región se identifican ahora con el así llamado Tercer Mundo, mientras que, por otra parte, han surgido potencias regionales que de alguna forma compiten con la influencia de Estados Unidos. Países como Argentina, Brasil, México, Venezuela e incluso Cuba brindan su apoyo y ejercen su influencia sobre un variado conjunto de actores, en sus respectivas áreas geográficas.

En suma, debido a un complejo conglomerado de elementos, en la actualidad América Latina es menos vulnerable a Estados Unidos que en cualquier otro momento de su historia desde principios del siglo XIX. Aun en el Caribe, en años recientes países como Panamá, Jamaica, Granada, Nicaragua, y ciertamente Cuba, han trazado su propio curso de acción política y económica, desafiando con éxito variable a Estados Unidos. Dadas estas realidades, y considerando la susceptibilidad del nacionalismo latinoamericano ante cualquier sugerencia de presiones por parte de Estados Unidos, se desprende que los intereses de este país en América Latina serán mejor servidos con una política de no intervención, no coerción y libre comercio.

En la última década se ha presentado un considerable aumento en la emigración legal e ilegal desde el Caribe hacia Estados Unidos, por lo que ahora se argumenta que este fenómeno por sí mismo hace del área del Caribe “uno de los intereses más obligados y permanentes”<sup>5</sup> de Estados Unidos.

Sin embargo, no queda del todo claro qué política habrá de seguirse en relación con este fenómeno, además de aumentar la asistencia para el desarrollo con el fin de combatir las causas económicas y sociales que, en buena medida, son responsables de los patrones de emigración. Ciertamente, de lo anterior no se desprende que se deba conceder una mayor urgencia y una nueva racionalidad a las medidas contrarrevolucionarias, puesto que las revoluciones triun-

<sup>5</sup> Robert A. Pastor, “Our Real Interest in Central America”, *Atlantic Monthly*, julio de 1982, p. 38.

fantes pueden conducir tanto a una reducción del flujo migratorio (ya sea debido a una redistribución económica, a la aplicación de controles políticos o a los dos factores) como a un incremento de ese flujo.

Con todo, ¿qué se puede pensar acerca de los intereses estratégicos de Estados Unidos en el área del Caribe? En realidad, los aspectos de carácter estratégico y geopolítico, más que la importancia económica del Caribe, se encuentran en el centro de las preocupaciones tradicionales de Estados Unidos. Ahora bien, ¿pueden la intranquilidad política y la fuerza creciente de la izquierda revolucionaria en países como El Salvador, Nicaragua o Guatemala, afectar realmente los intereses vitales de Estados Unidos? Los tradicionalistas tienden a ser poco precisos en relación con este tema, aunque es posible identificar con cierta claridad tres preocupaciones bien definidas: la necesidad de proteger las vías marítimas en el área por la que se transporta la mitad de todas las importaciones y exportaciones de Estados Unidos, incluyendo tres cuartas partes de las importaciones petroleras; la necesidad de mantener un tránsito sin obstáculos por el Canal de Panamá, y el peligro que puede representar, para la seguridad de Estados Unidos, el posible establecimiento de bases militares soviéticas en el territorio de lo que se ha definido como el "flanco del sur" o "la frontera sur".<sup>6</sup> Recientemente, el gobierno de Reagan se ha referido a todas estas supuestas amenazas, a las cuales ha añadido una nueva: el peligro que significan, para México, las revoluciones en Centroamérica según la "teoría del dominó".

Ninguna de estas preocupaciones claramente anacrónicas puede ser, sin embargo, justificada. Es improbable que exista hoy en día algún actor capaz de amenazar las líneas marítimas norteamericanas o el Canal de Panamá, y resulta complicado visualizar cualquier amenaza seria a estos intereses en el futuro, excepto tal vez en el contexto de una guerra general con la Unión Soviética, en cuyo caso seguramente habría otros aspectos más importantes de qué preocuparse. El espectro de bases militares soviéticas en el Caribe es, de igual manera, poco alarmante. ¿Qué propósitos podrían servir tales bases? Algunos observadores parecen estar preocupados por el peligro potencial de un ataque soviético, con base en el Caribe, contra Estados Unidos. Sin embargo, la idea de una invasión militar convencional soviética de Estados Unidos es mera fantasía, e incluso un ataque militar convencional por parte de Cuba y apoyado por los soviéticos contra cualquier país de la región, motivaría una respuesta combinada de Estados Unidos y de sus aliados latinoamericanos que sin duda estaría muy por encima de las fuerzas comunistas agresoras. Por otra parte, si las bases y las armas nucleares soviéticas constituyen la principal preocupación, la Unión Soviética cuenta ya con la capacidad para destruir varias veces a Estados Unidos, capacidad instalada en submarinos y en bases en su propio territorio. La Unión Soviética, entonces, no tiene necesidad alguna de misiles adicionales en el Caribe, y en caso de que llegara a tenerlos, no serían importantes para el equilibrio del terror con Estados Unidos.

<sup>6</sup> Hayes, p. 135; Domínguez, p. 64.

La posibilidad más realista sería entonces la de una fuerza militar cubano-soviética que estuviera diseñada no para el logro de objetivos expansionistas, sino para proteger los regímenes de izquierda amenazados por Estados Unidos o por los aliados de este último país. Sin embargo, tal fuerza no sería una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, sino más bien para las intenciones norteamericanas de disponer libremente de cualquier gobierno en el Caribe, y tal vez en toda América Latina.

Por todas las razones anteriores, el resultado de las revoluciones (aun de las revoluciones de izquierda apoyadas por Cuba en Centroamérica) no es importante para ningún interés verdaderamente considerable, menos aún para los intereses vitales de Estados Unidos. Si llegaran a establecerse gobiernos marxistas en Nicaragua o El Salvador, quizá se mantengan independientes de Cuba y de la Unión Soviética, a menos que las presiones, la hostilidad, "los programas de desestabilización" o las invasiones de exiliados apoyadas por Estados Unidos obliguen a esos gobiernos a inclinarse hacia los países socialistas en busca de protección y de ayuda económica. Sería muy improbable que tales gobiernos aumentaran los enormes riesgos que enfrentarían ya con ataques irracionales a los buques petroleros norteamericanos en el Caribe, o transformándose a sí mismos en bases militares para la expansión soviética o cubana. Y en caso de que fuera necesario adoptar provisiones para asegurarse frente a tan improbables contingencias, la mejor forma de hacerlo sería no oponer resistencia indiscriminada frente al fenómeno revolucionario, sino dar indicios de tolerancia hacia los gobiernos locales de cualquier tendencia política en el Caribe, en la medida en que dichos gobiernos se abstuvieran de intervenir en el Canal de Panamá, de establecer alianzas militares con la Unión Soviética y de permitir el emplazamiento de armas nucleares soviéticas en su territorio. Bajo estas circunstancias, ¿puede pensarse seriamente que algún gobierno de izquierda en el área, por definición frágil, empobrecido y vulnerable, pudiera provocar gratuitamente un enfrentamiento económico y militar con Estados Unidos, e incluso con todos los países no comunistas del hemisferio?

En lo tocante a la supuesta amenaza que la revolución en Centroamérica representa para México, cabe señalar que la teoría del dominó no tiene en Centroamérica mayor aplicabilidad de la que ha tenido en el Sudeste de Asia. Las actuales revoluciones en Centroamérica son fundamentalmente un resultado de causas internas; las causas externas son de escala e impacto reducidos. En cualquier caso, resulta difícil imaginar un escenario probable en el que la revolución comunista pudiera extenderse hacia México, ya fuera como resultado de un "modelo" desarrollado en cualquier otro país de la región, o como resultado de la exportación de la revolución por gobiernos marxistas. En razón de su tamaño, estabilidad política, eficiencia gubernamental, y viabilidad económica (a pesar de las recientes dificultades experimentadas en el mercado petrolero), México es muy diferente de sus vecinos del sur. De este modo, no existen fundamentos serios para la preocupación del gobierno de Reagan sobre el impacto, en México, de la revolución en El Salvador y Nicaragua.

A pesar de los cambios en las circunstancias del período actual en compa-

ración con las del siglo XIX, a pesar de la ausencia de intereses estratégicos y económicos vitales, América Latina continúa siendo psicológicamente importante para Estados Unidos. En otras palabras, debido a la tradicional susceptibilidad norteamericana, el Hemisferio Occidental —particularmente el área del Caribe— continúa siendo importante para Estados Unidos, aunque no en razón de su importancia real sino en función de que se piensa que es importante. Encontrándose la política norteamericana atrapada en medio de esta “profecía realizada”, surgen de esta situación algunas consecuencias reales: el derrocamiento de un gobierno nacionalista de izquierda en Guatemala, en 1954; la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, en 1961; la crisis de los misiles en Cuba, en 1962; la invasión a la República Dominicana, en 1965; el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende en Chile, en 1973; y los crecientes conflictos actuales con la izquierda en Nicaragua y en El Salvador (con Guatemala de nuevo en el horizonte).

Es tiempo de que Estados Unidos se libere a sí mismo y a sus vecinos de América Latina de las trampas que les ha impuesto la Doctrina Monroe. Estados Unidos no tiene ni la necesidad ni la capacidad para continuar afirmando su hegemonía sobre América Latina, ni siquiera sobre el área del Caribe. Al carecer de intereses vitales y quizá también —dadas las complejidades y las incertidumbres acerca del proceso de cambio político— del conocimiento sobre cómo servir a estos intereses (en caso de que realmente existan), paradójicamente Estados Unidos se encuentra libre para hacer lo que es moralmente correcto. Además, una política que sea consistente con los valores y con los principios profesados, probablemente habrá de servir mejor los “intereses” norteamericanos en el largo plazo. Tal política habrá de tomar la forma de crecientes esfuerzos para promover la democracia, proteger los derechos humanos y brindar asistencia para el desarrollo económico en América Latina. Y en caso de que las realidades políticas, las presiones económicas internas, la preocupación por la carga wilsoniana, la ausencia de conocimientos o la resistencia latinoamericana —incluso frente a formas constructivas de participación norteamericana en los asuntos internos de la región— pudieran impedir a Estados Unidos desempeñar un papel positivo más activo, por lo menos —y esto no es poca cosa— Estados Unidos dejaría de causar daño a los países de la región.